

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°104

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **ORLANDO ZULUAGA LOAIZA** contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere de forma escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare que es beneficiario de la CCT y los laudos arbitrales vigentes suscritos entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia y ese Ente Territorial; y, en consecuencia, se condene al pago de la pensión de jubilación convencional consagrada en la cláusula 12 de la CCT suscrita el 9 de diciembre de 1970 y los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Hechos

El actor nació el 31 de marzo de 1968, por lo que cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 2018.

El demandante se vinculó como trabajador oficial al servicio del Departamento de Antioquia, el día **7 de marzo de 1994**, por lo que cumplió 20 años de servicios el mismo día y mes del año 2014.

El día **6 de septiembre de 1994**, el actor se afilió al **Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia**, beneficiándose desde ese momento de las normas convencionales vigentes.

Entre la agremiación sindical y el **Departamento de Antioquia** se han suscrito varias CCT, estableciéndose en la suscrita el 9 de diciembre de 1970 una pensión de jubilación para todos los trabajadores, al cumplir 20 años de servicios y 50 de edad.

Con fundamento en esta norma convencional y al entender cumplido el requisito de tiempo de servicios solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación al **Departamento**, petición que le fue negada en la **Resolución 2018060238403 del 17 de agosto de 2018**, confirmada posteriormente por actos administrativos del 3 de octubre y el 12 de diciembre de 2018.

Respuesta Departamento de Antioquia

La entidad demandada a través de apoderada manifestó que son ciertos los hechos, expresando que la pensión de jubilación reclamada por el actor perdió su vigencia desde el 31 de julio de 2010 en virtud de la reforma constitucional establecida por el Acto legislativo 01 de 2005.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: petición sin el cumplimiento de los requisitos legales, inexistencia de la obligación, falta de título y causa, presunción de buena fe y justa causa para actuar e improcedencia de la condena en costas.

Sentencia de primera instancia

La Juez Primera Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **14 de abril de 2023**, **negó** las pretensiones del demandante por considerar que la cláusula 12 de la CCT 1970 suscrita entre el **Sintradepartamento** y el **Departamento de Antioquia**, perdió su vigencia el 31 de julio de 2010 en virtud de lo dispuesto en el párrafo transitorio 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, citando en sustento de su posición la sentencia SL-520-2022.

En ese sentido en el entendido que el actor no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional con anterioridad al 31 de

julio de 2010, esto teniendo en cuenta que la condición de tiempo de servicios apenas la cumplió el **7 de marzo de 2014**.

Esta decisión no la compartió la apoderada del actor, motivo por el cual la impugnó en los siguientes términos:

Recurso parte demandante

La recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto desconoció que el Acto Legislativo de 2005 tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2014 y que la condición de tiempo de servicios única que le era exigible al actor para acceder a la pensión convencional la cumplió el **7 de marzo de 2014**, siendo en esta caso la edad una condición para el disfrute de la prestación.

En ese sentido teniendo en cuenta que la CCT se encuentra vigente, puesto que se prorroga en el tiempo, siendo necesario respetar los derechos adquiridos.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, no se presentaron alegatos.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con el recursos de apelación interpuesto, será: (i) Determinar, si con sustento en el Acto Legislativo 01 de 2005, la pensión contenida en la convención colectiva 1970 suscrita entre **Sintradepartamento** y el **Departamento de Antioquia** solo tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010 o se extendió más allá de dicha fecha, (ii) de encontrarse que los efectos del acuerdo convencional trascienden este límite temporal se determinará si el señor **Orlando Zuluaga Loaiza** cumple con los requisitos para acceder a la pensión de que reclama y (iii) si procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. El señor **Orlando Zuluaga Loaiza** nació el **31 de marzo de 1968** (car01/arc03/pág.71).
2. Conforme con certificación expedida el 9 de marzo de 2021, el demandante presta sus servicios al **Departamento de Antioquia** desde el **7 de marzo de 1994** desempeñándose en el cargo de Chofer (Trabajador oficial) (car01/arc03/pág.70).
3. El actor se encuentra afiliado al **Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia** desde el **6 de septiembre de 1994** (car01/arc03/pag.73).
4. Entre el **Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia** y este Ente Territorial se suscribió la CCT 1970¹, en cuya clausula duodécima se estableció (Car04/Arc03):

“El Gobierno Departamental continuará reconocimiento la pensión de jubilación a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta años (50) años de edad” (pág.4).
5. El día **12 de abril de 2018**, el señor **Orlando Zuluaga Loaiza** solicitó ante el **Departamento de Antioquia** pensión de jubilación convencional consagrada en los artículos 96 y 98 de la recopilación de Normas Convencionales y Laudos Arbitrales vigentes (car01/arc03/pág.17).
6. Mediante **Resolución 2018060238403 del 17 de agosto de 2018**, el **Departamento de Antioquia** negó esta solicitud por considerar que en virtud de lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, cualquier disposición convencional que estableciera condiciones diferentes para acceder a un derecho pensional diferentes a las establecidas en la ley perdieron vigencia desde el 31 de julio de 2010 (car01/arc03/págs.18-30).
7. Esta decisión fue recurrida en reposición y apelación por el señor **Zuluaga Loaiza**, siendo resueltos estos recursos de forma negativa mediante la **Resoluciones 2018060362352 del 3 de octubre de 2018** y **2018060400792 del 12 de diciembre de 2018**, respectivamente (car01/arc03/págs.46-67).

¹ Documento que cumple con el requisito de depósito establecido en el artículo 469 del CST para producir efectos jurídicos (Car04/Arc03/pág.6)

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

De la vigencia del artículo 20 de la CCT 1970, suscrita entre Sintradespartamento y el Departamento de Antioquia

En el año de 2005, el constituyente delegado con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones reformó el artículo 48 de la Carta Política a través del Acto Legislativo 01, estableciendo dentro de las múltiples modificaciones la eliminación de la posibilidad de que entre empleadores y trabajadores se suscribieran actos jurídicos que establecieran condiciones pensionales diferentes a las establecidas por el legislador.

No obstante, consciente del impacto que esta determinación generaba en los acuerdos en curso, se decidió que los mismos se respetarían teniendo como fecha límite el 31 de julio de 2010. El texto literal contenido en el parágrafo 3° transitorio de la norma citada, dispone:

Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.

Esta norma contempla dos supuestos, (i) el de los acuerdos anteriores a su vigencia, cuyas condiciones se respetaran durante el término inicialmente estipulado, teniendo como límite definitivo el 31 de julio de 2010 y (ii) los acuerdos posteriores a su vigencia, en los cuales no se pueden acordar condiciones pensionales diferentes.

En el caso que se somete a estudio, nos encontramos ante el primero de los supuestos, punto en el que además de la lectura ya expresada, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que es necesario revisar si por voluntad de las partes se estipuló un periodo de vigencia que fuera más allá del 31 de julio de 2010, puesto que, en estos casos debe estarse a tal decisión, dado que al quedar incorporado ese querer en un texto convencional constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras este continúe vigente.

La forma de entender la norma bajo el anterior criterio se resume en la sentencia SL-4163-2021 de la siguiente manera:

- a. En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.
- b. Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.
- c. Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.

Esta lectura de la disposición se ha mantenido en el tiempo siendo muestra de ello la sentencia SL-1049-2022, en la que se indicó:

...se tiene que conforme al alcance fijado actualmente por esta Sala, al parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 «cuando la convención se encontraba vigente a la fecha de entrar a regir el Acto Legislativo, es decir, las suscritas antes del 29 de julio de 2005 o que estaban rigiendo por la ausencia de denuncia» -lo que sucede en el presente caso, pues la convención reguladora de la pensión pretendida fue suscrita en el año de 1987 y venía siendo objeto de prórrogas-, «esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem» (CSJ SL1925-2021, CSJ SL4904-2021).

Esta interpretación por lo demás, fue la efectuada de forma reciente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-347-2022, en la que el Alto Tribunal estudio acción de tutela presentada contra la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia por establecer que la fecha límite para cumplir los requisitos establecidos en una disposición convencional objeto de prorrogas automáticas era el 31 de julio de 2010, indicando en tal sentido no se configuró alguna causal de procedibilidad de acción de tutela, puesto que, tal determinación siguió el precedente establecido por la jurisdicción ordinaria, conforme con el cual, salvo un acuerdo previo y expreso sobre la vigencia de una CCT, está en materia pensional no puede ir más allá del límite fijado por el Constituyente el 31 de julio de 2010.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que en el caso de autos no se advierte en el texto convencional una norma que establezca una vigencia más allá del **31 de julio de 2010**, la condición de tiempo de servicios necesaria para la causación de la pensión consagrada en la cláusula 12 de la CCT 1970, debió cumplirse antes del plazo estipulado por el Acto Legislativo 01 de 2005, situación que no se cumplió en el caso de autos, como quiera que el actor ingresó al servicio del **Departamento de Antioquia** el día **7 de marzo de 1994** (car01/arc03/pág.70), lo que implica que los 20 años de servicios los acreditó el **7 de marzo de 2014**, cuando la norma que pretende que se le aplique había perdido su vigencia por fuerza del mandato Constitucional.

De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez a-quo al negar las pretensiones del actor, motivo por el cual se **confirmará** la decisión de primera instancia.

Costas

Costas en esta instancia a cargo del demandante por haberse resuelto desfavorablemente el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia a cargo del actor y en favor del **Departamento de Antioquia** se fijan en la suma de **\$580.000**.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez Primera Laboral del Circuito de Medellín, el día **14 de abril de 2023**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por el señor **ORLANDO ZULUAGA LOAIZA** contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante. Las agencias en esta instancia a cargo del actor y en favor del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** se fijan en la suma de **\$580.000**.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-001-2021-00116-01
Radicado Interno: P0972323
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Orlando Zuluaga Loaiza
Demandado	Departamento de Antioquia
Radicado	05001-31-05-001-2021-00116-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de mayo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO